***ORALIDAD***

**Providencia**: Sentencia de Segunda Instancia, jueves 7 de septiembre de 2017.

**Radicación No**:66001-31-05-005-2016-00118-01

**Proceso**:  Ordinario Laboral.

**Demandante**: Ancizar de Jesús Valencia Román

**Demandado:** Colpensiones.

**Juzgado de origen**: Quinto Laboral del Circuito de Pereira

**Magistrado Ponente:** Francisco Javier Tamayo Tabares.

**Tema a tratar: Pensión especial de vejez por hijo discapacitado a cargo. Requisitos.** : i) ser madre o padre trabajador, ii) tener un hijo que padezca invalidez física o mental debidamente calificada, iii) que el hijo discapacitado dependa económicamente de la madre o padre, sin que se requiera que sea en forma exclusiva de uno de ellos, y iv) que el padre o madre acredite el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media con prestación definida, indistintamente de si tiene o no un contrato de trabajo vigente al momento de reclamar la prestación.

**AUDIENCIA PÚBLICA:**

Pereira, hoy siete (07) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), siendo las ( ) reunidos en la Sala de Audiencia las magistradas y el suscrito magistrado de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, en su Sala de Decisión No. 03, presidida por el ponente, declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el grado jurisdiccional de consulta frente a la sentencia dictada el 2 de febrero de 2017 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ***Ancizar de Jesús Valencia Román*** contra ***Colpensiones.***

***IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES:***

1. ***INTRODUCCIÓN***

Pretende el señor Ancizar de Jesús Valencia Román que la justicia laboral declare que tiene derecho a que se le reconozca la pensión especial de vejez prevista en el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003. Con base en ello, aspira que se condene a Colpensiones a que reconozca y pague la prestación económica a partir del 30 de junio de 2014, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en su defecto la indexación de las sumas reconocidas, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor.

Para fundamentar tales pedimentos, expone que nació el 16 de diciembre de 1956, contando a la presentación de la demanda con 59 años de edad; que en toda su vida laboral tiene cotizadas 1.362 semanas, habiendo completado las 1300 exigidas el 30 de junio de 2014; que su núcleo familiar está conformado por su compañera permanente, Rubiela Cano Bedoya y su hija, Erika Tatiana Valencia Cano, de 21 años de edad, a quien mediante dictamen Nº 379-2012 de 2012, el departamento médico del ISS le determinó una PCL del 70.50% estructurada el 25 de octubre de 1994.

Aduce que su compañera permanente padece de nódulo tiroideo solido hipoecogénico, lo cual la limita para cuidar a Erika Tatiana; que presentó ante la entidad demandada solicitud de reconocimiento de la pensión anticipada de vejez por hijo invalido, empero, la misma fue resuelta negativamente a través de la resolución Nº GNR 211592 de 21 de agosto de 2013; que el 13 de noviembre de 2014 solicitó nuevamente el reconocimiento pensional, sin embargo, el derecho le fue negado por medio de la resolución Nº GNR 40241 de 20 de febrero de 2015, con el argumento de que su hija invalida puede ser cuidada por su señora madre. Indica que ante dicha negativa, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, el primero, resuelto a través de la resolución Nº GNR 298716 de 2015, confirmando la decisión anterior, y el de apelación sin solución a la fecha de presentación de la demanda.

Transcurrido el término de traslado otorgado por el juzgado de conocimiento a la Administradora Colombiana de Pensiones para dar respuesta al libelo introductorio, el mismo transcurrió en silencio, motivo por el que a través de auto de 13 de junio de 2016 –fl.70- se tuvo por no contestada y se dio aplicación a las sanciones procesales establecidas en el artículo 31 del C.P.T. y de la S.S.

1. ***SENTENCIA DEL JUZGADO***

El juzgado de conocimiento, mediante fallo del 2 de febrero de 2017, negó las pretensiones de la demanda y absolvió de la totalidad de las mismas a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. En la motiva, determinó que si bien el señor Ancizar de Jesús Valencia Román acredita la densidad de semanas exigidas en la Ley 797 de 2003 y su hija Erika Tatiana Valencia Cano tiene una PCL superior al 50%, lo cierto es que él no tiene el cuidado exclusivo de ésta, ya que quien hace esa tarea es su compañera permanente Rubiela Cano Bedoya, quien se encuentra capacitada para ello, pues no obra en el expediente prueba que indique que ella se encuentra imposibilitada para realizar esas actividades, ya que si bien en su historia clínica se evidencia que padece de vértigo e hipertensión, lo cierto es que conforme a ese documento, esos padecimientos no son frecuentes, al punto que no se reportan visitas al médico por esas enfermedades entre el 2014 y el 2016.

1. ***CONSULTA***

Dado que la decisión fue adversa a los intereses del demandante, se remitió ante esta Sala para que se surta el grado jurisdiccional de consulta a su favor, tal como lo manda el artículo 69 del C.P.T

***Del problema jurídico:***

*¿Tiene derecho el señor Ancizar de Jesús Valencia Román a que se le reconozca y pague la pensión especial de vejez prevista en el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003?*

***Alegatos en esta instancia*:**

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar la consulta, se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia. Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las siguientes:

***IV.CONSIDERACIONES***

El inciso segundo del parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 consagra la pensión especial de vejez por tener a cargo a un hijo o hija discapacitado. La norma, en su tenor literal establece:

*“La madre trabajadora cuyo hijo padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral.”*

En sentencia C-989 de 2006, la Corte Constitucional declaró exequible condicionalmente el término “madre”, en el entendido, que el beneficio pensional se hará extensivo al padre cabeza de familia con hijos inválidos que dependan económicamente de él. No obstante, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en sede de Casación Laboral[[1]](#footnote-1), ha sido reiterativa en establecer que la condición de madre o padre cabeza de familia -*lo cual implica una dependencia económica exclusiva o absoluta del hijo respecto de su progenitor*-, no se erige como un requisito indispensable para acceder a la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad, primero, porque tal exigencia no se encuentra prevista en la norma, y segundo, porque por ley ambos padres están obligados a contribuir con el sostenimiento y manutención de sus hijos menores e inválidos.

De ahí que tampoco pueda exigirse como requisito adicional para el otorgamiento de este tipo de beneficios, que el padre o la madre reclamante de la prestación, demuestre ser el único que tiene a cargo y en forma exclusiva y absoluta el cuidado personal del hijo discapacitado, con prescindencia de cualquier otro miembro del grupo familiar, inclusive del otro progenitor; pues tal restricción violaría el principio de igualdad contenido en los preceptos legales y constitucionales, en cuanto a que ambos padres están en el mismo nivel o igualdad de condiciones en su obligación de velar por la asistencia, protección, cuidado personal, custodia, desarrollo armónico e integral y manutención de los hijos menores o en situación de discapacidad, caso en el cual la obligación permanecerá indemne hasta tanto persista esa condición.

Adicionalmente, también se entorpecería el alcance y propósito esencial de la norma, el cual conforme a los distintos análisis efectuados tanto por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional como el de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, no es otro distinto que desarrollar una medida que contribuya a la garantía de los derechos de las personas en situación de discapacidad, en cumplimiento al mandato que la Constitución Política pone en cabeza del Estado (artículo 44 y 47), y que se materializa permitiéndoles a las madres o padres trabajadores que han alcanzado el mínimo de semanas necesarias para la pensión ordinaria de vejez, independientemente de la edad, acceder el beneficio pensional previsto en la norma, con el fin de que puedan dedicar y atender de tiempo completo los cuidados y necesidades que requieren sus hijos discapacitados, apoyando su proceso de rehabilitación y desarrollo integral, sin tener que preocuparse por ejercen una actividad laboral para cubrir las necesidades económicas del grupo familiar.

Por tanto, la restricción de que el cuidado del padre o madre cuyos hijos tengan discapacidad, deba ser exclusivo respecto de ellos, no tiene aplicación a este tipo de asuntos en los que media un interés superior, como es el de la protección del hijo discapacitado, pues se itera, tal beneficio pensional lo que busca es relevar al padre o madre de tener que ejercer una actividad laboral para el sostenimiento de la familia, para que a cambio, pueda compensar con cuidado, colaboración y apoyo, el proceso de desarrollo y rehabilitación de su hijo discapacitado, sin que pueda excluirse para su procedencia, el cuidado de su otro progenitor, pues por ley natural, los padres son los primeros llamados a atender este tipo de obligaciones permanentes de asistencia moral y física al hijo en condiciones de discapacidad, y que más benéfico para una persona en situación de discapacidad que gozar de la participación y cuidado de los miembros que componen su entorno o seno familiar.

De todo lo expuesto, se concluye que los presupuestos que exige la norma para acceder al beneficio pensional, son: i) ser madre o padre trabajador, ii) tener un hijo que padezca invalidez física o mental debidamente calificada, iii) que el hijo discapacitado dependa económicamente de la madre o padre, sin que sea igual a decir que el cuidado personal del discapacitado, estuviese a cargo exclusivamente del postulante a la pensión, puesto que de otra manera no se explicaría como ese postulante podía atender sus deberes laborales a fin de que se predicara la dependencia económica exclusiva a través de los ingresos destinados a él, su esposa e hija incapaz, y iv) que el padre o madre acredite el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media con prestación definida, indistintamente de si tiene o no un contrato de trabajo vigente al momento de reclamar la prestación.

En cuanto a la continuidad del beneficio pensional, es decir, para que no se suspenda el pago de la pensión, se requiere: i) que el padre o madre no se reincorporen a la fuerza laboral y ii) que el hijo discapacitado permanezca en ese estado y dependa de los cuidados del demandante, sin que ello se oponga a que tal cuidado personal lo comparta con el otro cónyuge, puesto que el vínculo legal entre los padres impone tal deber conjunto, y ello redundará en beneficio del descendiente, máxime dadas las características físicas de éste y el tipo de padecimiento que sufre, el cual no en pocas ocasiones requiere la ayuda física del acudiente para el traslado de un sitio a otros, como de quienes por haberles implantado en su cráneo la “válvula de Hakim”, se ven afectados en sus funciones motoras, equilibrio, debido a la hidrocefalia aunado a los episodios convulsivos que la afectan en su salud, contando en este momento con 23 años.

Partiendo de estos puntos, encuentra la Sala respecto del primer requisito, que la calidad de padre trabajador se acredita con la amplia densidad de cotizaciones con las cuenta el señor Valencia Román, en total 1.419,06 en toda su vida laboral, tal como lo certifica la historia laboral allegada por Colpensiones, con la cual se puede evidenciar sin ambages que el actor ha sido un constante aportante al sistema de pensiones, y que cumple con la densidad de semanas mínimas exigidas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003.

Se acredita también conforme al registro civil de nacimiento emitido por la Notaría Única del Círculo de Pueblo Rico –fl.18-, que Erika Tatiana Valencia Cano nació el 19 de mayo de 1994 y es hija del señor Ancizar de Jesús Valencia Román. Así mismo, que aquella tiene una pérdida de capacidad laboral del 70.50 %, estructurada el 25 de octubre de 1994, pues nació con hidrocefalia, padece de un retardo mental severo y síndrome convulsivo, según dictamen No. 379-2012 del 27 de julio de 2012 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda –fl.19-.

En cuanto a la dependencia económica, la Sala encuentra que se cumple a cabalidad con dicho presupuesto, pues conforme lo relataron los declarantes recibidos en la actuación, es el demandante quien vela por el sostenimiento del hogar. De otra parte, en casos como el presente, en el cual la joven Erika Tatiana desde su nacimiento se encuentra en condición de discapacidad, fácil es colegir que nunca ha tenido la oportunidad de ingresar al mercado laboral y menos aún siquiera cotizar al sistema de pensiones, razón por la que son sus padres quienes al tenor de lo preceptuado en el artículo 42 Superior y en las normas del Código Civil, puntualmente, en su artículo 413, tienen la obligación de velar por su sostenimiento y cuidado personal.

Frente al tema del cuidado personal exclusivo en cabeza del demandante, el cual sirvió de base a la sentenciadora de primer grado para negar el derecho pretendido, la Sala dirá que no avala tal interpretación restrictiva, pues de hacerlo, estaría desconociendo no sólo la finalidad de la norma, sino además, condicionando su procedencia, a la protección y cuidado del hijo discapacitado de un sólo progenitor, y no de ambos, desconociendo con ello, la igualdad de facultades y deberes que le asisten al padre y la madre ante sus hijos menores o discapacitados.

Por otro lado, prohijar la tesis blandida por la a-quo, como se expuso atrás, no se entendería cómo se repartiría el tiempo, el demandante, entre cumplir su actividad laboral, profesional u oficio, del cual deriva sus ingresos para el mantenimiento económico suyo, el de su esposa e hija, fundamento legal para que se le otorgue la pensión aquí deprecada, con aquel otro requisito que para la funcionaria de primer grado, impondría un cuidado exclusivo de la hija, antes de que entrara a disfrutar su gracia especial, cuidado que por otro lado, compartió con la progenitora, acorde con su deber legal, dado que no milita prueba en contrario.

Adicionalmente, la joven Erika Tatiana requiere atención permanente para sobrellevar sus condiciones de invalidez e indefensión, pues debe recibir ayuda para bañarse y vestirse, tiene una válvula de Hakim que la hace perder el equilibrio para sus traslados desde su infancia, amén de que actualmente su progenitora viene presentando algunas dolencias de salud, tal como lo refleja su historia clínica, y se corrobora, además, con los dichos de los declarantes, lo cual de cierta manera podrían limitarla en el cuidado de su hija, implicando mayor dependencia del cuidado de su progenitor, para la ejecución de las más mínimas tareas de vida, razón por la cual, ilógico resulta hacer exigencias en estos casos, respecto a la forma como se debe acreditar la dependencia, cuando la misma salta de bulto, independientemente de que el otro cónyuge posea sus propias deficiencias de salud, más cuando Erika Tatiana, es persona adulta cuyo manejo o manipulación exige del acudiente resistencia física, que se supone es mayor la de Valencia Román.

Por lo tanto, es evidente que el demandante sí satisfizo la totalidad de los requerimientos legales para acceder a la pensión especial de invalidez, razón por la que se revocará la decisión de primer grado, para en su lugar conceder la prestación reclamada a partir del 1 de junio de 2014, calenda en que el actor reunió la densidad de semanas mínimas para acceder al beneficio pensional espacial, seguida de su reclamación el 13 de noviembre de 2014 –ver fl.43-. Se reconocerán 13 mesadas anuales, pues en los términos del inciso 8º del artículo 1º del Acto Legislativo 01/05, la causación del derecho se dio con posterioridad al 31 de julio de julio de 2011.

El monto de la mesada pensional será equivale un salario mínimo legal vigente, que para el año 2014 era de $616.000, pues efectuados los cálculos respetivos conforme se ilustra en el ANEXO I, se obtiene un monto inferior de $371.204.

El retroactivo pensional causado desde el 1º de junio de 2014 al 31 de agosto de 2017, es decir, incluyendo las mesadas generadas hasta la emisión de esta sentencia, asciende a $28`169.188, conforme el cuadro que se pone de presente a los asistentes y hará parte del acta que se suscriba al final de esta diligencia, como ANEXO II.

Frente al tema de los intereses moratorios, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dispone que: *“…en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”*.

Conforme lo ha establecido el órgano de cierre de la especialidad laboral, tales réditos proceden a partir del día siguiente al vencimiento de los cuatro (4) meses que confiere el artículo 9º de la Ley 797 de 2003 para resolver la solicitud de reconocimiento pensional[[2]](#footnote-2), de modo que en el caso puntual, se ordenará el pago de los intereses moratorios a partir del 13 de marzo de 2015 y hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación, pues la reclamación pensional fue presentada ante la entidad demanda el 13 de noviembre de 2014 –fl.43-.

De conformidad con el inciso 2 del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo previsto por el inciso 3, artículo 42 del Decreto 692 de 1994, se autoriza a Colpensiones, para que del retroactivo pensional, haga los correspondientes descuentos del valor que corresponda al total de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, a partir de la fecha en la cual se ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez, con la finalidad de que las transfiera a la entidad administradora de salud a la que el demandante se encuentre afiliado.

Las costas en ambas instancias estarán a cargo de Colpensiones y a favor del demandante.

En mérito de lo expuesto,elTribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Laboral No. 2, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**FALLA**

1. Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 2 de febrero de 2017, dentro del proceso de la referencia y en su lugar declarar que el señor Ancizar de Jesús Valencia Román tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión especial de vejez contenida en el inciso 2º del parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se condenaa la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- a reconocer y pagar a favor del señor Ancizar de Jesús Valencia Román la suma de $28`169.188 por concepto de las mesadas causadas entre el 1º de junio de 2014 y el 31 de agosto de 2017, sin perjuicio de que se siga generando hasta su solución, siempre que se mantengan las condiciones que le dieron origen a su reconocimiento.
3. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- reconocer y pagar en favor del señor Ancizar de Jesús Valencia Román, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 13 de marzo de 2015 y hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación.
4. Autorizar a Colpensiones a descontar del valor del retroactivo reconocido, los aportes con destino al sistema general de seguridad social en salud.
5. Se condena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a las costas de ambas instancias.

**NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE.**

La anterior decisión queda notificada en **estrados.**

**FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES**

Magistrado Ponente

**OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA** **JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ**

Magistrada Magistrado

-Salva voto-

ANEXO I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ANCIZAR DE JESUS VALENCIA ROMAN*** | | | | | | | | |
| ***Fecha de nacimiento:*** | | |  |  | ***Fecha reconocimiento pensión:*** | | | *01/06/2014* |
| ***Total semanas cotizadas:*** | | | 514,29 |  | ***Tasa Ley 100/93:*** | **NO** | ***65,03%*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO*** | | | |  | ***Ingreso Base de cotización actualizado*** | ***IPC Dane (serie de empalme)*** | | ***Promedio Salarial (Dias x IBC actualizado/total dias)*** |
| ***Fechas de aporte*** | | ***Número de días*** | ***Ingreso Base de Cotización*** |  | ***IPC Final*** | ***IPC Inicial*** |
| ***Desde*** | ***Hasta*** |  |
| *25-may-04* | *31-may-04* | ***4*** | *358.000,00* |  | ***536.700,08*** | ***113,98*** | ***76,03*** | ***596,3*** |
| *01-jun-04* | *30-jun-04* | ***30*** | *358.000,00* |  | ***536.700,08*** | ***113,98*** | ***76,03*** | ***4.472,5*** |
| *01-jul-04* | *31-dic-04* | ***180*** | *358.000,00* |  | ***536.700,08*** | ***113,98*** | ***76,03*** | ***26.835,0*** |
| *01-ene-05* | *31-dic-05* | ***356*** | *381.000,00* |  | ***541.416,32*** | ***113,98*** | ***80,21*** | ***53.540,1*** |
| *01-ene-06* | *31-dic-06* | ***360*** | *408.000,00* |  | ***552.939,73*** | ***113,98*** | ***84,10*** | ***55.294,0*** |
| *01-ene-07* | *31-dic-07* | ***360*** | *434.000,00* |  | ***562.966,92*** | ***113,98*** | ***87,87*** | ***56.296,7*** |
| *01-ene-08* | *31-dic-08* | ***360*** | *461.000,00* |  | ***565.774,65*** | ***113,98*** | ***92,87*** | ***56.577,5*** |
| *01-ene-09* | *31-dic-09* | ***360*** | *497.000,00* |  | ***566.480,60*** | ***113,98*** | ***100,00*** | ***56.648,1*** |
| *01-ene-10* | *31-dic-10* | ***360*** | *515.000,00* |  | ***575.477,05*** | ***113,98*** | ***102,00*** | ***57.547,7*** |
| *01-ene-11* | *31-dic-11* | ***360*** | *536.000,00* |  | ***580.533,11*** | ***113,98*** | ***105,24*** | ***58.053,3*** |
| *01-ene-12* | *31-dic-12* | ***360*** | *567.000,00* |  | ***592.036,09*** | ***113,98*** | ***109,16*** | ***59.203,6*** |
| *01-ene-13* | *31-dic-13* | ***360*** | *589.500,00* |  | ***600.887,23*** | ***113,98*** | ***111,82*** | ***60.088,7*** |
| *01-ene-14* | *30-may-14* | ***150*** | *616.000,00* |  | ***616.000,00*** | ***113,98*** | ***113,98*** | ***25.666,7*** |
| ***TOTAL DIAS*** | | 3.600 |  |  |  | ***IBL*** | | 570.820 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ***Mesada*** | | ***371.204*** |

**Formula artículo 34 de la Ley 100 de 1993.**

r = 65.50 – 0.50 s

r = porcentaje del ingreso de liquidación

s = número de salario mínimos legales mensuales.

**Entonces,**

s = 570.820 (Promedio de los salarios devengados) / 616.000 (S.M.L.M.V 2014)

s = 0.926

**Por lo tanto**

r = 65.50 – 0.50 (0.926)

r = 65.50 – 0.46

r = 65.03%

IBL = $570.820

Tasa de reemplazo = 65.03%

Mesada pensional 2014 = $616.000

ANEXO II

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **VALOR DE LA MESADA** | **No. MESADAS** | **TOTAL** |
| 2014 | $616.000 | 8 | $4.928.000 |
| 2015 | $644.350 | 13 | $8.376.550 |
| 2016 | $689.454 | 13 | $8.962.902 |
| 2017 | $737.717 | 8 | $5.901.736 |
| TOTAL | | | **$28.169.188** |

1. Sentencia SL17898-2016, Radicación n.° 47492, Acta 45, M.P. Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, entre otras. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sentencia SL 4985 de 2017 Sala Laboral Corte Suprema de Justicia.

   Sentencia N° 42826 del 16 de octubre de 2012. [↑](#footnote-ref-2)